

Publicación de datos en procesos selectivos. Informe 24/2007

La consulta plantea dudas sobre la publicación en la página web de la Seguridad Social de un listado provisional de adjudicaciones a puestos de trabajo de la convocatoria de un concurso de méritos y su adecuación a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En relación con esta cuestión, cabe indicar, en primer lugar, que los datos cuya inclusión se pretende deben ser considerados datos de carácter personal, definidos por el artículo 3 a) de la Ley Orgánica 15/1999 como “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. Dichos datos se encuentran, además, incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal, habida cuenta que, conforme dispone el artículo 3 b) de la Ley Orgánica 15/1999, ostenta tal condición “todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”. En consecuencia, la cuestión planteada ha de analizarse partiendo de la regulación contenida en la Ley Orgánica 15/1999, a la que los datos se encuentran sujetos.

Sentado lo anterior, debe ahora plantearse la naturaleza jurídica que, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, ostenta la publicación en Internet de los datos referidos. A nuestro juicio, tal publicación ha de ser considerada como una auténtica cesión de datos, definida en el artículo 3 i) como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”

En este sentido, la puesta a disposición del público de dichos datos supone una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal establecido en el artículo 11 de la Ley, donde se establece que la misma solo puede verificarse para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y cesionario y exige para que pueda tener lugar el previo consentimiento del interesado, salvo que concurra alguna de las excepciones contempladas en el apartado segundo del propio artículo 11.

Pues bien, en el presente caso, debe tenerse en cuenta que el artículo 19.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, establece que “las administraciones públicas seleccionan su personal, ya sea funcionario, ya laboral, de acuerdo con su oferta de empleo público mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garantizan en todo caso los

principios constitucionales de igual, mérito y capacidad **así como el de publicidad**".

En consecuencia, las normas reguladoras del ingreso y promoción en la función pública vienen a establecer, como criterio esencial que funda su régimen, el principio de publicidad, cuestión lógica dado que resultará necesario el conocimiento por parte de los distintos aspirantes a las pruebas de los resultados de las mismas para conocer adecuadamente las circunstancias concurrentes en el proceso selectivo en el que han tomado parte.

En desarrollo de lo anterior, el Reglamento de Ingreso del personal al servicio de la Administración General de Estado y de Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 marzo, establece en su artículo 22.1 los criterios de publicidad de los resultados de las pruebas de ingreso, regulando el artículo 47 la publicidad de la resolución de los procedimientos de promoción interna. En ambos casos, si bien no se establece la publicación de los resultados en Internet, sí se establece la necesaria publicidad de dichos resultados a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de lo que se desprende, interpretando armonizadamente estas normas con el principio de publicidad consagrado por el citado artículo 19.3 de la Ley 30/1984, que será admisible y no contrario a las disposiciones reguladoras de la protección de datos de carácter personal la publicidad.

Además no puede obviarse lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992 donde se señala que: "Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medio de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos".

Ello no obstante si lo que se está publicando es la relación provisional de adjudicaciones de puestos, habrá de estarse a lo previsto en la Orden por la que se convocó el concurso de referencia. De esta manera, si en el mismo se establecía el procedimiento previo de publicación de resultados provisionales y este hecho fue debidamente conocido por aquellas personas que decidieron su participación en el mismo, entendemos que al conocer esta circunstancia los participantes en las mismas habrán dado su consentimiento previo a la citada cesión de sus datos cuando aceptaron las bases y efectuaron su solicitud de participación en las mismas. En ese caso, sería correcta la publicación de los referidos datos.

En cualquier caso, si las personas interesadas o afectadas (definidas por el artículo 3.e) de la Ley como "persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento a que se refiere el apartado c) del presente artículo), consideran que la referida publicación vulnera su derecho a la intimidad y se plantean la existencia de una actuación presuntamente contraria a la ley Orgánica 15/1999 deberán dirigir su denuncia ante este mismo organismo, con

la finalidad de que se adopten las medidas necesarias a fin de comprobar si procede o no la apertura del correspondiente expediente sancionador siendo así que el artículo 37.g) de la Ley atribuye a esta Agencia la potestad sancionadora en materia de protección de datos.

En todo caso las alegaciones efectuadas por el denunciante deberían contener la documentación acreditativa de la efectiva realidad de los hechos